

Un conflicto olvidado vuelve a las noticias Mientras Marruecos celebra una votación de la ONU, hoy se cumple un aniversario sombrío para el Sáhara Occidental

Ricky Goldstein

8 de noviembre de 2025

Una de las desventajas profesionales en el ámbito de los derechos humanos es que puedes dedicar años a intentar liberar a una persona encarcelada injustamente, solo para jubilarte sin haber logrado avances perceptibles. Aunque colegas más jóvenes continúen la lucha, la “misión no cumplida” pesa sobre ti.

Desde que me retiré hace 18 meses, varios casos siguen persiguiéndome, tal vez ninguno tanto como el de un grupo de 19 hombres saharauis que llevan 15 años en cárceles marroquíes, conocidos como el grupo de Gdeim Izik.

Los acusados de Gdeim Izik en el tribunal

Las últimas dos semanas han sido significativas para *la cause nationale*, como denomina el oficialismo marroquí su empeño por obtener la aceptación internacional de su anexión de facto del Sáhara Occidental, una antigua colonia española del tamaño de Colorado situada al sur del país. El Sáhara Occidental fue una causa célebre para los izquierdistas que se formaron en los años 60 y 70. Pero, tras un alto el fuego en 1991 que detuvo la mayor parte de los combates, el conflicto congelado prácticamente desapareció del mapa de los focos globales.

Sur de Marruecos y Sáhara Occidental

El 31 de octubre, el Consejo de Seguridad de la ONU votó por primera vez una resolución que se acerca a respaldar el llamado plan de autonomía de Marruecos como base para resolver el conflicto. El plan marroquí excluye la posibilidad de organizar un referéndum en el que los habitantes del territorio puedan elegir la independencia como una de las opciones. El Frente Polisario, movimiento armado independentista saharauí, respalda dicho referéndum, igual que lo hizo oficialmente la ONU durante décadas.

Para celebrar la votación del Consejo de Seguridad, el rey Mohamed VI decretó el 31 de octubre como día festivo nacional. El 6 de noviembre ya es festivo por el Sáhara Occidental: marca el aniversario —este año, el 50º— de la Marcha Verde, una movilización organizada por el Estado en la que cientos de miles de civiles marroquíes avanzaron simbólicamente hacia el territorio para reclamarlo como parte del reino. La marcha fue una respuesta desafiante a una opinión consultiva emitida semanas antes por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que declaró que Marruecos no tenía soberanía ni propiedad legal sobre el Sáhara Occidental, y que los vínculos históricos con el territorio no anulaban el derecho a la autodeterminación de sus habitantes.

La Marcha Verde de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, 1975

(Para más contexto sobre el conflicto del Sáhara Occidental, véanse los informes del International Crisis Group, incluida esta publicación del 20 de octubre de 2025, así como artículos recientes de Jacob Mundy y Khadija Mohsen-Finan).

El 8 de noviembre también es una suerte de aniversario para el Sáhara Occidental, pero uno más oscuro. Ese día de 2010, fuerzas de seguridad marroquíes intervinieron para dismantelar un gran campamento de protesta que los saharauis habían instalado un mes antes en pleno desierto, cerca de El Aaiún, la ciudad más grande del territorio. Aunque los agentes estaban desarmados, la operación encontró resistencia que se extendió más allá del campamento. Al final de los disturbios, según las autoridades marroquíes, 11 agentes de seguridad habían muerto, así como 3 civiles. Algunos agentes fueron asesinados de forma atroz y sus cuerpos profanados.

Campamento de protesta en Gdeim Izik, octubre de 2010 (fotos de John Thorne)

Tras los hechos, las fuerzas de seguridad detuvieron a decenas de saharauis, de los cuales 25 —conocidos colectivamente como el grupo de Gdeim Izik— fueron juzgados juntos y condenados a penas de prisión, incluyendo cadena perpetua para nueve de ellos, acusados de planear y ejecutar los ataques mortales. En el caso de algunos de los acusados más conocidos, se trató de arrestar a “los sospechosos de siempre”.

Conocí a uno de esos “sospechosos de siempre”, Naâma Asfari, unos años antes de los sucesos de Gdeim Izik. Naâma es serio, comprometido y, al igual que algunos de sus coacusados, está entregado a la causa de la autodeterminación saharauí. Las autoridades marroquíes ya lo venían persiguiendo por supuestos delitos fabricados. La policía lo arrestó el 7 de noviembre de 2010, un día antes de la violencia, y lo acusó de haberla orquestado. Tenía entonces 40 años; hoy cumple una condena de 30. Es licenciado en Derecho y está casado con Claude Mangin-Asfari, activista francesa y profesora jubilada, a quien Marruecos ha impedido entrar en el país para visitarlo.

Naâma Asfari, en Francia, en los años 2000

Conocí a otro de los acusados tras el juicio. Taki Machdoufi, que tenía 25 años durante los hechos, fue uno de los dos condenados a la pena cumplida y puestos en libertad. Taki viajó desde El Aaiún hasta Rabat para hablar con Human Rights Watch (HRW).

Para las organizaciones de derechos humanos, este tipo de casos es especialmente complejo: los crímenes fueron violentos y horribles. Cuando el acusado lo es por criticar pacíficamente al rey o a las fuerzas de seguridad, puedes casi hacer que ChatGPT redacte tu declaración crítica, pues las propias acusaciones vulneran los derechos humanos.

Pero en un caso como Gdeim Izik, no basta con pedir la liberación de los sospechosos; hay que demostrar que se produjo una injusticia procesal. Esto implica arremangarse para observar los juicios (cuando es posible), analizar las transcripciones e investigar a todas las partes, algo tan laborioso que las ONG solo pueden hacerlo en casos seleccionados. Afortunadamente, observadores de otras organizaciones asistieron a los procedimientos y publicaron sus conclusiones.

El primer juicio tuvo lugar en 2013 ante un tribunal militar de Rabat, lo que ya violaba los derechos de los acusados civiles. El segundo se celebró en 2017 ante la Corte de Apelación de Rabat, que confirmó los veredictos de culpabilidad para todos.

Human Rights Watch argumentó sólidamente que ambos juicios fueron fundamentalmente injustos, ya que las pruebas incriminatorias eran principalmente “confesiones” de los acusados que, como afirmaron ante el tribunal, eran falsas y habían sido obtenidas mediante tortura. El primer tribunal ni siquiera investigó estas denuncias creíbles. El segundo lo hizo, pero más de seis años después, cuando ya no quedaba rastro de abusos.

Los detalles se encuentran en los informes de HRW; otros estudios demuestran lo frecuente que es que los tribunales marroquíes usen confesiones impugnadas para condenar en casos políticos. Un ejemplo elocuente es este extracto de la “confesión” de Naâma, según la policía:

"El propósito de establecer el campamento de protesta era difundir la discordia y el terror, y desestabilizar la seguridad de El Aaiún y sus alrededores..."

Según HRW, la declaración parece escrita por la agencia oficial marroquí: “lo que suscita dudas sobre su carácter voluntario.” Ahora que ya no necesito emplear el lenguaje formal de HRW, puedo decirlo: es risible.

Machdoufi explicó a HRW que, tras ser torturado por la policía, le obligaron a firmar una declaración sin leerla, dejándole solo la opción de estampar su huella con las manos atadas. Solo conoció el contenido de su “confesión” cuando se la mostraron en el juicio.

Taki Machdoufi en Rabat, tras salir de prisión

Los acusados dijeron reiteradamente en el juicio militar que sus confesiones fueron arrancadas bajo tortura. Los jueces las usaron igualmente para condenarlos sin ordenar antes una investigación.

La Corte de Casación marroquí anuló el veredicto del tribunal militar, tras una reforma que limitó los juicios militares a civiles con efecto retroactivo. El tribunal civil, intentando abordar las denuncias de tortura, ordenó exámenes médicos forenses. Los médicos concluyeron que, tras seis años, no era posible probar ni refutar los abusos.

Aun así, el tribunal admitió las confesiones en el proceso, junto a nuevas pruebas que tampoco lograron vincular a los acusados con actos concretos de muerte o lesiones graves. Los veredictos fueron confirmados, y en 2020 la Corte de Casación los ratificó, sin que quedaran vías de recurso internas.

Hoy, 19 de los acusados siguen en prisión, repartidos entre seis cárceles en Marruecos, lejos de sus familias en el Sáhara Occidental. Órganos de la ONU han expresado preocupación por sus denuncias de malos tratos en prisión. En 2023, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU determinó que la detención era “arbitraria” y pidió su liberación.

No hay signos de avance en el caso. Apenas existe movilización pública por el grupo, a diferencia de otros presos famosos de Marruecos como el periodista Omar Radi, indultado tras condenas cuestionadas. Incluso las ONG de derechos humanos independientes de Marruecos rara vez abordan casos de represión contra activistas

saharauis, ya que hacerlo pondría en riesgo su propia existencia: la *cause nationale* es el tercer riel de la política marroquí.

Y, además —y sin olvidar a las familias de los agentes fallecidos, que también merecen justicia—, es más difícil argumentar: “Alguien mató a policías hace 15 años, pero no probaron que fueran estos hombres, libérenlos”, que decir: “Libérenlo, porque lo que hizo no es delito.”

Tal vez exista una ventana de oportunidad ahora, mientras Marruecos celebra la votación de la ONU y actúa como si fuera *game over* para los *indépendantistes* saharauis (o *séparatistes*, como los llama Rabat). Liberar al grupo de Gdeim Izik — mediante un indulto real o alguna otra medida— no solo sería un paso hacia la reparación de una injusticia terrible para ellos y sus familias. También sería interpretado como una señal de flexibilización del puño de hierro que Marruecos mantiene desde hace décadas sobre el Sáhara Occidental, en un momento de creciente interés internacional por resolver el conflicto.